

RESPUESTAS AL DEBILITAMIENTO DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD VENEZOLANA EN LA ÉPOCA DE HUGO CHÁVEZ

Steve Ellner¹

RESUMEN

Venezuela en los años 90 enfrentó una crisis política proveniente del descrédito de los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las instituciones neocorporativistas, a veces asociados con la democracia al servicio de las elites. Hugo Chávez interpretó este deterioro como un reflejo del debilitamiento del Estado y la pérdida de gobernabilidad en el contexto de agudos problemas sociales. Dos tendencias surgieron bajo la presidencia de Chávez. Por un lado, el personalismo que caracterizó el chavismo, y los esfuerzos de desplazar las instituciones de la vieja democracia, amenazaron con crear un vacío institucional y convertir a Chávez en una especie de caudillo. Por otro lado, el Estado intervencionista en la economía promovido por el gobierno de Chávez prometió crear nuevas instituciones. El chavismo se asemejó al "populismo clásico" de los años 30 y 40 en cuanto al intervencionismo estatal, la incorporación de sectores previamente excluidos, y el papel central desempeñado por una figura carismática.

PALABRAS CLAVE: POPULISMO / CHÁVEZ / NEOLIBERALISMO / CRISIS POLÍTICA / MOVIMIENTO OBRERO.

ABSTRACT

In the 1990s, Venezuela faced a political crisis as a result of the loss of prestige of political parties, labor organizations and neocorporatist institutions, considered by some as synonymous with elitist democracy. Hugo Chávez interpreted this deterioration as a reflection of the weakening of the state and the loss of governability, especially as it related to social problems. Two tendencies emerged under the Chávez's presidency. On the one hand, the personalism that characterized the Chavista movement, and its attempts to displace the institutions of the old democracy, threatened to create an institutional vacuum and convert Chavez into a virtual caudillo. On the other hand, the interventionist state promoted by Chávez pointed in the direction of the emergence of new institutions. Chavismo resembled "classical populism" of the 1930s and 1940s with regard to state interventionism in the economy, the incorporation of previously excluded sectors, and the key role played by a charismatic leader.

SOBRE EL AUTOR

Steve Ellner es Ph.D. en Historia Latinoamericana de la University of New Mexico; profesor de Historia Económica y Ciencias Sociales en la Universidad de Oriente en Puerto La Cruz, Venezuela, desde 1977; autor de: *La política venezolana en la época de Chávez: clases, polarización y conflicto* (coeditor; 2003 publicado por Nueva Sociedad); *El sindicalismo en Venezuela en el contexto democrático* (1958-1994), 1995; *The Latin American Left: From the Fallo of Allende to Perestroika* (co-editor, 1993); *De la derrota guerrillera a la política innovadora: Movimiento al Socialismo (MAS)* (1992); colaborador de revistas no académicas, como *In These Times*, *Commonweal* y *The Nation*.

¹ El autor recibió financiamiento del Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente (Venezuela) para realizar este trabajo. Nicolás J. Boulaine, Fradique Chacón Mendoza y Marco Aurelio Rodríguez García trabajaron sobre la versión en español.

La estabilidad política que caracterizó el período de gobiernos neoliberales en América Latina en los años 90 fortaleció la autoridad de los gobiernos democráticos y facilitó su consolidación. En Chile, Brasil, Argentina, México y Perú, los partidos políticos y los presidentes identificados con las políticas neoliberales fueron reelectos, algo nada característico hasta entonces en la política latinoamericana. Los partidos de gobierno en estos países, y gran parte de su base electoral, estaban conscientes del hecho de que las políticas radicales de intervención del Estado en la economía (la antítesis del neoliberalismo) amenazaban con generar agudos conflictos sociales y políticos, así como ocurrió bajo los regímenes populistas pro-izquierda de los decenios anteriores (como los de João Goulart en Brasil y de Alan García en el Perú). Otro logro neoliberal que favoreció la estabilidad fue el evitar aumentos sustanciales en el costo de la vida, algo que también contrastaba con los gobiernos pro-izquierdistas del período anterior, cuyas políticas contribuyeron a generar una inflación galopante.

El caso venezolano se diferenció de este modelo en varios aspectos importantes y eso se explica porque los venezolanos estaban alineados de manera muy particular a la idea de la intervención del Estado en la economía y al nacionalismo económico, ambos asociados con el populismo izquierdista. El período venezolano de tendencia pro-izquierda de los años 70, que incluyó reformas sociales costosas y la nacionalización de las industrias claves, no produjo ni inflación incontrolable ni agitación social, y tampoco condujo a un golpe militar. De hecho, estas medidas no quedaron desacreditadas, ya que los venezolanos reeligieron a Carlos Andrés Pérez, quien había sido Presidente durante el período de la década de los setenta, asumiendo que él iba a implementar de nuevo "exitosas" políticas económicas intervencionistas al estilo de su primer gobierno. Los períodos presidenciales en los que fueron reelectos Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1999), caracterizados por su inspiración pro-neoliberal, incumplieron sus promesas electorales sobre política económica, y resultaron menos exitosos que sus equivalentes neoliberales en otros países del continente. No solamente estos dos presidentes tuvieron que lidiar con perturbaciones políticas y sociales (particularmente durante la presidencia de Pérez) y con altas tasas inflacionarias (durante la presidencia de Caldera), sino que vieron su popularidad venirse abajo durante su período presidencial.

Por lo tanto, Venezuela no se enfrentó a la secuencia que sirvió de argumento en contra del intervencionismo de Estado de estilo "populista" y en favor de las políticas neoliberales implementadas en otros países del continente: políticas de intervención del Estado en la economía que causaron altas tasas inflacionarias y conflictos políticos y sociales agudos (años 60, 70), seguidas por regímenes militares represivos (años 60, 70 y 80), seguidos a su vez por gobiernos neoliberales que lograron

controlar la inflación y alcanzar un grado de estabilidad política (años 90). El escenario venezolano de los años 90 estaba entonces listo para la emergencia de un populista de izquierda como Hugo Chávez. Mientras los gobiernos pro-izquierdistas (como Goulart y Alan García) de toda América Latina estaban asociados con la falta de gobernabilidad y la desintegración del Estado, en el caso de Venezuela, Chávez se comprometió a fortalecer el Estado y a garantizar la soberanía nacional. Sin embargo, la inestabilidad creciente después de su segundo año del gobierno amenazó con conducir todo hacia la dirección opuesta.

La diversidad de posiciones asumidas por los actores políticos tradicionales en los países latinoamericanos contrastó también con el caso venezolano y ayuda a explicar la ruptura radical de esta nación con el neoliberalismo. No todos los dirigentes latinoamericanos asociados con la "forma tradicional de hacer política" aprobaron con entusiasmo las políticas neoliberales. En México, Chile y Argentina, por ejemplo, sectores importantes de los partidos socialdemócratas en el poder, y los sindicatos controlados por ellos, criticaron ciertos aspectos de las políticas neoliberales del gobierno y su estilo elitescos. Por lo tanto, había una buena posibilidad para que algunos políticos y partidos tradicionales asumieran un papel importante a favor de la modificación de medidas neoliberales y del regreso a una política más representativa que fortaleciera la credibilidad del sistema.

En Venezuela, la ruptura con el discurso y las estructuras políticas neoliberales prometía ser más completa. En contraste con las naciones antes mencionadas, los dirigentes de los partidos tradicionales venezolanos —Acción Democrática, COPEI, e incluso el Movimiento al Socialismo²— respaldaron casi sin excepción la legislación neoliberal del gobierno de Caldera y participaron en la comisión tripartita neocorporativista que redactó sus programas sociales. Por lo tanto, los *outsiders* antineoliberales, y no los dirigentes tradicionales, políticamente más moderados, encabezaron los esfuerzos para detener el impulso neoliberal de los años 90. En este proceso rechazaron la estructura neocorporativista que había servido de vehículo al neoliberalismo en Venezuela. Una vez en el poder, sin embargo, los chavistas se toparon con el problema de su falta de bases institucionales. No solamente su movimiento emergió desde las Fuerzas Armadas y por lo tanto carecía de vínculos con la sociedad, sino que el desprecio del gobierno de Chávez hacia las instituciones políticas existentes, particularmente las neocorporativistas, creó un vacío, por lo menos en el corto plazo. El resultado fue que Venezuela, al

² El partido Social Demócrata, AD, fue fundado en 1941, y el partido Social Cristiano, COPEI, en 1946. El MAS fue fundado en 1971 como un desprendimiento del Partido Comunista de Venezuela.

final del siglo, se encontraba frente al peligro de un debilitamiento continuo del Estado, exactamente lo opuesto a lo que Chávez se había comprometido a lograr.

El debilitamiento institucional

A pesar de un escenario político distinto, Venezuela en los años 90 estaba sujeta a las mismas transformaciones estructurales que debilitaron el Estado en todo el continente. Las dislocaciones sociales en América Latina causadas por la globalización dejaron a un creciente porcentaje de la población sin representación en las organizaciones existentes, y marginadas de la sociedad política. Además, las estrategias neoliberales adoptadas por los gobiernos latinoamericanos debilitaron las estructuras políticas que facilitaban la participación de los partidos políticos y de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. El discurso neoliberal no solamente desacreditaba a las organizaciones mediadoras; también la "terapia de *shock*" (*shock treatment*) dejaba de lado los canales políticos existentes con el fin de acelerar la implementación de políticas económicas antipopulares, al tiempo que los partidos políticos y los sindicatos perdían credibilidad.

En los decenios en los que predominaba el modelo de intervención del Estado en la economía, los politólogos asociaban a los partidos políticos institucionalizados y a los sindicatos fuertes con un sistema político sano. En los años 90, quedaron desacreditadas estas organizaciones por las razones antes expuestas. Así, después de dominar la política venezolana durante treinta y cinco años, AD y COPEI fueron derrotados en las elecciones de 1993 y 1998. El vacío creado por el debilitamiento de los partidos políticos y de los sindicatos durante los años 90, no fue llenado por los movimientos vecinales emergentes ni por otros movimientos sociales y las ONGs que proliferaron en los años 80, pero que carecían de una dirigencia nacional vinculada orgánicamente con las organizaciones de base (Ellner, 1999: 87-88).

Las estructuras y los convenios neocorporativistas también se vieron debilitados y desacreditados en Venezuela en los años 90. Desde los años 70, las comisiones tripartitas en las que participaban representantes de los sindicatos, los patronos y el gobierno, fueron un componente esencial del sistema neocorporativista venezolano (Salamanca, 1998: 134-154). Las comisiones tripartitas redactaban la legislación, ayudaban a fijar los incrementos anuales del salario mínimo y tenían una competencia casi judicial en asuntos relacionados con las prestaciones sociales. En los últimos años de gobierno de Caldera, una comisión tripartita formuló la legislación neoliberal sobre las prestaciones sociales y el sistema de seguridad social, semejante a las reformas que dividieron los sindicatos en otros países latinoamericanos. En contraste, el apoyo uná-

nime a las reformas por parte de la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) desacreditó tanto a la Confederación como al sistema de representación neocorporativista. Otro golpe al neocorporativismo fue la negativa de Chávez a convocar comisiones tripartitas (como contemplaba la Ley del Trabajo), y su rechazo a las "políticas de consenso" porque equivalían a tomas de decisiones por parte de una elite. El gobierno de Chávez, sin embargo, no logró desarrollar, por lo menos a corto plazo, mecanismos formales alternos para la consulta a la población en general.

Dos modelos distintos emergieron en Venezuela en los años 90 como resultado de la descentralización de los servicios públicos durante el período de reformas neoliberales después de 1989. Un modelo estaba favorable a la descentralización gradual y la *coordinación* entre los representantes del gobierno en el ámbito federal, estatal y local. En contraste, los que defendían la descentralización radical argumentaban que, dada la profunda crisis política que atravesaba el país, la descentralización era un imperativo en el sentido de que serviría para revitalizar el sistema democrático. Añadían que incluso una descentralización mal administrada sería preferible a ninguna. Se oponían a las tomas de decisiones *coordinadas* entre los distintos niveles de gobierno argumentando que las autoridades centrales, dados sus recursos y poder político superiores, dominarían cualquier mecanismo de planificación conjunta. Inspirado en este razonamiento, el segundo gobierno de Pérez revocó el sistema de "comités de coordinación" de representación de gobiernos central y estatal que en los diez años anteriores había diseñado y ejecutado planes de inversión con dinero asignado por el gobierno central a los estados. El modelo radical seguido por el gobierno de Pérez despojó al gobierno central de su papel vigilante, estimuló la proliferación de estructuras paralelas en la burocracia estatal-municipal, y reforzó las relaciones clientelares (García Guadilla, 2002: 101-102).

Correctivos al dilema institucional

Desde el comienzo de su actividad política, Hugo Chávez argumentó que factores externos, consecuencia de la globalización y de factores internos relacionados con la corrupción, socavaban la autoridad del Estado venezolano en todas sus dimensiones. Los argumentos del presidente Chávez en contra de las fórmulas neoliberales reflejaban su preocupación por la erosión del poder del Estado (lo que él llamaba "el Estado desarticulado") y la pérdida de soberanía nacional (Francia, 2003: 35, 109). La intensidad de estas preocupaciones, su forma de plantear los problemas, y las soluciones que ofrecía, reflejaban la formación y el origen militar de Chávez y de su movimiento. Así, por ejemplo, el papel especial e innovador que Chávez les asignaba a los militares era una respuesta a su temor de que la globalización amenazara con

minimizar la importancia del Estado en los países del Tercer Mundo, y de sus Fuerzas Armadas en particular³.

Los adversarios de Chávez, particularmente en el movimiento sindical y la izquierda, sostenían que mientras el gobierno chavista declaraba la guerra a los grupos capitalistas locales, a los cuales acusaba de "golpistas", daba un tratamiento preferencial a los intereses económicos extranjeros (Magdalena, 2003: 1-3). Sin embargo, las políticas del gobierno chavista contenían una dosis significativa de nacionalismo económico y de intervención del Estado en la economía. Así, por ejemplo, el gobierno detuvo la tendencia hacia la privatización de los diez años anteriores, prohibió la venta de acciones de la compañía petrolera nacional PDVSA, y posteriormente promulgó la Ley Orgánica de Hidrocarburos que aseguraba a PDVSA un control mayoritario en todas las asociaciones de explotación de petróleo.

La preocupación de Chávez por el debilitamiento del Estado se reflejaba en sus reservas hacia la descentralización llevada a cabo por los gobiernos neoliberales durante los diez años anteriores. De hecho, Chávez usaba los mismos argumentos que se habían formulado durante la etapa "clásica" del populismo latinoamericano de los años 40 (como en el caso de Acción Democrática de ese período), específicamente que el federalismo agravaba las desigualdades geográficas y que solamente un gobierno central fuerte podía superar los problemas de la desigualdad social y del subdesarrollo (Harnecker, 2002: 142). El Consejo Federal de Gobierno (CFG) creado por la Constitución de 1999 (redactada por los seguidores de Chávez), establecía procedimientos conjuntos de toma de decisiones con representantes de los gobiernos central, estatal y local, similar a los mecanismos adoptados durante el gobierno pro izquierda de Pérez en los años 70, pero el CFG era todavía más centralista en el sentido de que el presidente de ese organismo era el vicepresidente de la nación. En realidad, el compromiso de Chávez con cualquier descentralización era cuestionable. Al llegar a la mitad de 2003, apenas se había activado el CFG, pero sin transferir ningún servicio público a los

³ Los oficiales que participaron en la intentona del golpe del 4 de febrero de 1992 y de otro alzamiento militar en noviembre del mismo año, defendieron el papel tradicional de las Fuerzas Armadas como guardianes de la seguridad nacional. El sentimiento nacionalista sostenía sus argumentos: con la privatización de las industrias estratégicas a intereses extranjeros, la corrupción generalizada y la incompetencia de la burocracia estatal, lo que está en juego no sólo es la seguridad nacional, sino la soberanía nacional. El almirante retirado Hernán Gruber Odremán, quien dirigió el segundo golpe en 1992, posteriormente publicó artículos en la prensa nacional, sobre el nuevo papel que los políticos, alentados por los Estados Unidos, estarían supuestamente confirmando a las Fuerzas Armadas venezolanas. Gruber sostuvo: "el destino aparente de nuestras Fuerzas Armadas recuerda lo que sucedió con nuestros camaradas en Panamá", que fueron completamente desmanteladas después de la invasión norteamericana a Panamá en 1989 (Gruber, 1999: 14, 47).

gobiernos estatal o local, mientras que el gobierno central redujo las asignaciones a los gobiernos estatales y municipales.

La política exterior del gobierno de Chávez también fue diseñada para defender la soberanía nacional y evitar la subordinación del Estado a las fuerzas globales. Su concepto de un "Mundo Multipolar" sirvió como argumento para fortalecer la OPEP después de diez años en los cuales el gobierno venezolano había abandonado su fuerte compromiso tradicional con esta organización. Además, Chávez insistió (más que los gobiernos brasileños de Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva) que el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se debía posponer hasta que América Latina tuviera la oportunidad de prepararse para competir con la industria norteamericana. Chávez reconoció la importancia del Pacto Andino, pero proponía algo más que un simple acuerdo económico: una "Unión Bolivariana" que incluyera objetivos políticos y culturales (Díaz Rangel, 2002: 138).

Para corregir el debilitamiento de la autoridad del Estado, Chávez propuso dismantelar la estructura neocorporativista que favorecía los partidos políticos y otros intereses organizados a expensas de la eficiencia del Estado y de la defensa de las prioridades nacionales. Para lograr este objetivo, Chávez se comprometía a implementar una transformación completa (que llamaba "revolucionaria") del sistema político de la nación. El plan de Chávez consistió en la revitalización de la "sociedad civil", aunque no estaba claro si este término se refería a las organizaciones autónomas o si era sinónimo de "el pueblo". Tanto en la teoría como en la práctica, la visión y las acciones de Chávez iban en dos direcciones contrarias: la creación de un vacío organizacional e institucional que terminaría debilitando al Estado por falta de mecanismos viables que lo vinculara con la sociedad; y el fortalecimiento de una sociedad civil dinámica, libre de vínculos con los partidos tradicionales, que reforzaría la legitimidad del Estado.

El primer escenario, descrito por los adversarios de Chávez, fue apuntalado con los escritos de Norberto Ceresole, un teórico argentino que celebraba el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha por la liberación nacional en los países del Tercer Mundo. Antes de llegar al poder, Chávez se sintió atraído por las ideas de Ceresole, especialmente cuando avizoraba que en la postguerra fría el imperialismo norteamericano pretendería debilitar las Fuerzas Armadas del Tercer Mundo (Blanco Muñoz, 1998: 382) (ver segunda nota de referencia). En efecto, la visión de Ceresole era la de un caudillo que reemplazara a las instituciones existentes y expresara el sentimiento nacionalista, pero sin transferir el poder al pueblo.

Según los adversarios de Chávez, la tendencia radical del chavismo promovió consciente o inconscientemente el modelo del caudillismo al

crear organizaciones paralelas, con el propósito de desplazar a las existentes en el movimiento sindical y la sociedad civil. Estas organizaciones incipientes no solamente fueron incapaces de atraer a los dirigentes veteranos, sino que (según la oposición) no tuvieron apoyo general y no defendieron una posición autónoma frente al partido y al gobierno chavistas. Los antichavistas concluyeron que la sociedad civil patrocinada por el gobierno de Chávez limitaba la eficacia de las organizaciones autónomas y contribuía así al desarrollo de un gobierno de tipo caudillista pregonado por Ceresole (Caballero, 2002: 218).

El segundo escenario, esta vez optimista y definido como la "democracia participativa", fue apuntalado por la Constitución de 1999, que incorporaba organizaciones de la sociedad civil en las tomas de decisiones como, por ejemplo, el nombramiento de jueces (Artículos 255 y 264), de miembros del Consejo Nacional Electoral (Artículo 296), del Contralor, y del Fiscal General de la República (Artículo 279). A pesar del eclecticismo en su pensamiento, que en un momento dado lo llevó a considerar a Ceresole como un consejero, Chávez siempre afirmó su apoyo a una sociedad civil floreciente. Su Movimiento Bolivariano Revolucionario-200, por ejemplo, que dirigió la asonada de 1992, rechazó una solución puramente militar y adoptó la estrategia de la "alianza cívico-militar". En ese momento, Chávez se inclinaba más hacia la posición del izquierdista no dogmático Alfredo Maneiro (previamente del Partido Comunista de Venezuela), quien abogó por un "movimiento de movimientos" desde las bases, que hacia los planteamientos vanguardistas del guerrillero Douglas Bravo (Harnecker, 2002: 25)⁴. Finalmente, demostrando claramente que rechazaba la doctrina elitista de Ceresole, el gobierno de Chávez al llegar al poder declaró al escritor argentino virtualmente persona *non grata* durante una visita a Venezuela, después de lo cual tuvo que salir del país.

El populismo de Chávez en contraste con el populismo "clásico" y el neopopulismo

Un breve bosquejo de los primeros cinco años del gobierno de Chávez sirve para demostrar sus semejanzas con el populismo latinoamericano "clásico" (o radical) de los años 30 y 40, representado por los movimientos dirigidos por Juan Domingo Perón (Argentina), Getúlio Vargas (Brasil) y Acción Democrática (Venezuela). Chávez, como los populistas clásicos, arremetió contra una elite, específicamente la cúpula ("el cogollo") que controlaba los partidos del *establishment* a nivel nacional en el contexto de la llamada "partidocracia" (Coppedge, 1994). El ofrecimiento electoral principal de Chávez durante la campaña presidencial

⁴ En 1965, Bravo rechazó la línea del Partido Comunista de negociar una salida de la lucha armada.

de 1998 fue la redacción de una nueva constitución con el fin de enterrar la "partidocracia" (lo que él frecuentemente llamó la "Cuarta República"). La propuesta dio origen a la convocatoria de la Asamblea Constituyente durante su primer año en el poder y a la aprobación en un referéndum nacional de la nueva constitución. Este documento redujo el poder de los partidos políticos al restringir su injerencia en los nombramientos del consejo electoral, el fiscal general y el contralor nacional, como también al eliminar los subsidios estatales a las organizaciones políticas y sindicales.

En segundo lugar, Chávez, al estilo de los populistas clásicos como Perón y Vargas, es un dirigente carismático y su movimiento tiende a caracterizarse por el personalismo a costa del desarrollo organizativo. También, como el populismo clásico durante la etapa de la sustitución de las importaciones de los años 30 y 40, Chávez abrazó el modelo de intervención del Estado en la economía. Como parte de la política intervencionista, Chávez frenó las privatizaciones que caracterizaron a los años 90. Específicamente, la Ley Orgánica de Hidrocarburos promulgada en 2001 limitó la participación del capital privado en el marco de la "Apertura Petrolera" (de inspiración neoliberal de los gobiernos anteriores) a menos de 50 por ciento en todas las asociaciones estratégicas en la industria petrolera.

Finalmente, el intervencionismo se expresó en los programas sociales implementados en el año 2003, tales como las misiones de alfabetización (Misión Robinson), de atención médica (Barrio Adentro) y educación a nivel secundario (Misión Ribas). Estos programas, conjuntamente con el otorgamiento de crédito a cooperativas y microempresas, pusieron de manifiesto otra tendencia "populista": la priorización (explícita en el caso de Chávez) de programas sociales por encima de programas de crecimiento económico, y crecimiento industrial en particular.

Es probable que el movimiento político encabezado por Hugo Chávez, como los de los populistas clásicos de los años 30 y 40, deje una marca imborrable sobre la vida política nacional en Venezuela. Sobre todo, un gran número de miembros de la clase marginal consideran el movimiento chavista como suyo, y se identifican con sus objetivos declarados y su visión. Además, Chávez ha creado un partido político y una coalición que probablemente formarán parte del panorama político nacional por algún tiempo. Sin embargo, el alto grado de polarización en Venezuela —y el discurso basado en la dicotomía de "nosotros" contra "ellos" típico de populismo— es una espada de doble filo. Genera mayor lealtad hacia Chávez y su movimiento, pero al mismo tiempo intensifica el rechazo hacia él entre los sectores privilegiados, limitando así su margen de maniobra y la posibilidad de lograr la estabilidad política y social en el país.

Mientras el populismo de Chávez se asemeja al "populismo clásico" de los años 30 y 40, contrasta en aspectos fundamentales con el populismo moderno latinoamericano asociado con Alberto Fujimori, conocido como "neopopulismo" (Weyland, 1999). Chávez fue comparado a menudo con Fujimori por los analistas y actores políticos, desde el ex-presidente Clinton hasta los periodistas norteamericanos y venezolanos. La mayoría de estas comparaciones no académicas eran poco profundas, por cuanto se enfocó solamente en la demagogia y en las tendencias autoritarias. Pasaban por alto las características esenciales que tenían en común Chávez y Fujimori (aún más que Menem) y que los definían como populistas: atracción especial sobre los sectores marginales de la población (los que pertenecen a la economía informal), discurso antielitescos, imagen de una persona que no pertenecía a la política tradicional, y carisma.

La polarización social durante los diez años del gobierno de Fujimori no llegó a los extremos de Venezuela donde se profundizó durante el mandato de Chávez. Las movilizaciones de 2002 a favor y en contra de Chávez pusieron en evidencia la distancia que existía entre la clase media y la clase baja en el plano político. Las frecuentes marchas y manifestaciones que exigían la salida de Chávez antes y después del intento de golpe del 11 de abril, se llevaron a cabo en las prósperas urbanizaciones del este de Caracas, pero movilizaron pocos habitantes de los barrios populares. En contraste, las marchas a favor del gobierno frecuentemente comenzaron en la zona más pobre ubicada en el oeste de la capital. La reacción de un gran número de los habitantes de los barrios al golpe del 11 de abril demostró que Chávez podía contar con un apoyo activo considerable, y no solamente con apoyo electoral. El 13 de abril, una multitud de pobres, algunos de los cuales habían caminado quince o treinta kilómetros por la ausencia de transporte público, rodearon el palacio presidencial y las bases militares en Caracas y en otras ciudades para exigir la liberación de Chávez. La naturaleza pacífica de estas movilizaciones, y el peligro personal que enfrentaron los manifestantes por el silenciamiento de los medios de comunicación, reflejaban un alto grado de compromiso entre los seguidores de Chávez y cierta capacidad de organización de parte del movimiento chavista.

El éxito de Chávez en mantener el apoyo de la clase baja está fundamentado en la credibilidad de su anti-neoliberalismo. Sus críticos pertenecientes a la izquierda y al movimiento sindical denunciaron su discurso anti-neoliberal como retórica vacía y demagógica, y también argumentaron que nunca formuló un verdadero programa anti-neoliberal. Si estas acusaciones hubieran sido generalmente aceptadas, ellas habrían sin duda socavado el apoyo de los sectores no privilegiados, que según las encuestas desaprueban las fórmulas neoliberales. Aunque es innegable que el Presidente Chávez no tenía un programa económico coherente, puso fin a diez años de privatizaciones (en contras-

te con Fujimori, a pesar de que a veces afirmaba ser "anti-neoliberal"). Así, la Constitución de 1999 prohíbe la venta de acciones de la compañía petrolera estatal PDVSA y garantiza el control por parte del Estado sobre el sistema de seguridad social. Además, Chávez anunció que iba a favorecer las "asociaciones estratégicas" por encima de las privatizaciones, específicamente en el caso de la industria del aluminio y del astillero DIANCA. En los hechos, ninguna empresa de los dos sectores fue privatizada.

En otro aspecto importante, la base social del movimiento chavista puede terminar pareciéndose al populismo clásico de los años 30 y 40 más que al "neopopulismo" de los años 90. Los analistas han señalado al apogeo del populismo clásico y al inicio de las políticas de sustitución de importaciones como una coyuntura crítica (Collier y Collier, 1991). Los partidos populistas promovieron la participación de los sectores excluidos de la población, específicamente los campesinos y los trabajadores, en las estructuras de sindicatos, partidos y Estado. Esta incorporación aseguraba que los partidos populistas conservarían la lealtad de un gran número de estos seguidores durante su vida entera, y en muchos casos durante la de sus hijos. El movimiento chavista ha logrado atraer a los miembros de la clase marginal que en su mayor parte no estaban incorporados en la vida institucional del país. Como resultado, estos militantes chavistas han superado el sentido de exclusión que tenían desde tiempo atrás al participar activamente en la defensa del régimen y al vincularse con estructuras incipientes, aunque mucho más frágiles que el movimiento sindical naciente durante la época del populismo clásico (Ellner, 2003b). Si la experiencia del populismo clásico es instructiva, hay buena posibilidad de que el movimiento chavista conservará la lealtad de estos sectores durante los años venideros.

Los analistas políticos y los actores han denunciado las tendencias demagógicas y autoritaristas del movimiento de Chávez, su negativa a promover la institucionalización, y sus acciones que restaban autonomía a la sociedad civil. Estas características pondrían en tela de juicio la capacidad de los chavistas de participar políticamente con eficacia de acuerdo con las reglas del juego establecidas por el sistema democrático durante un período largo. Sin embargo, cuando se compara la versión chavista del populismo con el neopopulismo, y con el régimen de Fujimori en particular, estas señaladas tendencias parecen menos severas. A pesar de un grado peligroso de autonomía militar establecida en la Constitución de 1999 (que eliminó la revisión legislativa de los ascensos militares) y de alegaciones de represión "de baja intensidad" (como acoso de periodistas), el gobierno se abstuvo en general de usar la fuerza en contra de una oposición altamente movilizada. Al mismo tiempo, los chavistas redactaron la Constitución de 1999 con el propósito de profundizar la democracia. Por último, el movimiento cha-

vista no es del todo monolítico. Las movilizaciones realizadas en su nombre no fueron siempre controladas por el partido; y las corrientes internas, como por ejemplo los sindicalistas chavistas, a veces adoptan posiciones que los partidos pro-chavistas no respaldan oficialmente (Ellner, 2003a: 224-228). Estas características indican un grado de complejidad que es más compatible con el sistema democrático que con el personalismo extremo que caracteriza al neopopulismo. De la misma forma, los movimientos populistas clásicos de los años 30 y 40 mantuvieron vínculos estrechos con sectores dentro de las Fuerzas Armadas y fueron frecuentemente acusados de demagógicos, antidemocráticos y anti-institucionalistas, pero, sin embargo, dieron contribuciones duraderas a la democracia de sus países respectivos.

La principal característica común de los fenómenos Fujimori y Chávez es su arrastre de la clase marginal. Sin embargo, a diferencia del caso de Fujimori, quien gozó de apoyo importante entre la clase media, la base social exclusiva de Chávez es los sectores marginales, que le brindan el apoyo activo que le fue crucial para su supervivencia política. La capacidad de movilización de la clase marginal, y específicamente su respuesta al golpe del 11 de abril de 2002, no tuvo algo equivalente durante el gobierno de Fujimori.

Los sindicatos y el espinoso problema de la autonomía

El modelo de la “democracia participativa” y el concepto del régimen del caudillo propuesto por Ceresole tienen implicaciones para la sociedad civil y el movimiento obrero en particular. El modelo participativo contempla un movimiento sindical que podría apoyar a un gobierno o partido político determinado pero nunca someterse a su control. En contraste, el fuerte Poder Ejecutivo defendido por Ceresole niega la autonomía sindical.

Los ataques frontales de Chávez en contra de la dirigencia nacional de los sindicatos controlados por AD durante cincuenta años, amenazaban con cortar el vínculo entre el Estado y la sociedad. Este peligro fue agravado por la polarización extrema del país que colocó a una gran parte de la sociedad civil en el campo de la oposición, empeñada en derribar al régimen. En consecuencia, el reto prioritario al que Chávez se enfrentaba no era fijar una definición abstracta de la “democracia participativa”, sino ganarse a los trabajadores sindicalizados y –tal vez un desafío mucho más grande– organizar a los miembros de la economía informal.

El verdadero debate en torno a la dirección del chavismo era la evaluación de la autonomía e influencia de los movimientos que terminaron promoviendo los seguidores de Chávez. Los chavistas habían llegado al

poder con poco apoyo organizado y avanzaron en ese sentido sólo modestamente durante los tres primeros años del gobierno. Sin embargo, con la radicalización del gobierno y con la polarización política del país en 2001, los chavistas le dieron una prioridad al trabajo de organización y movilización, lo que sin duda era un imperativo para la supervivencia de su gobierno. La victoria de Chávez en el intento de golpe de abril de 2002, y en la huelga general de diez semanas que le siguió, dio más impulso al esfuerzo de organización. El descrédito de la CTV debido a su rol dirigente de ambas acciones animó a los chavistas a establecer la rival Unión Nacional de Trabajadores (UNT) en abril de 2003. No estaba claro si la UNT iba a mantener una posición de autonomía frente al chavismo, pero llama la atención que la mitad de los miembros del comité coordinador de la confederación no eran chavistas y provinieron de diversas posiciones ideológicas (Ellner, 2003: 172-173).

Estos independientes dentro de la UNT desafiaron la polarización al levantar la bandera de la autonomía sindical frente a los partidos políticos y al Estado. Por lo tanto insistieron en un proceso fundador prolongado, con el fin de establecer principios y procedimientos de participación de bases que harían a la UNT más inmune a la interferencia de los partidos políticos y del Estado. Los sindicalistas chavistas a veces también actuaron de forma independiente, al punto de que ciertas posiciones de los líderes sindicales del partido de Chávez (Movimiento Quinta República-MVR) no siempre coincidían con las posiciones defendidas por los dirigentes de ese partido, sobre problemas que iban desde la legislación del seguro social hasta la toma, por parte de los obreros, de empresas que habían decidido cerrar después de la huelga general de diez semanas en 2003.

Sin embargo, el movimiento sindical emergente no escapó al peligro del control político. Mientras los independientes priorizaban la autonomía sindical, los sindicalistas chavistas (del MVR) estaban más preocupados por la pugna entre las diferentes corrientes políticas sindicales. Así, después de 1998, los dirigentes sindicales chavistas se quisieron aprovechar de la posición dominante del MVR en el seno del gobierno y la debilidad de sus adversarios para llevar a cabo una estrategia apoyada en los poderes Ejecutivo y Legislativo para quitarle el control del movimiento sindical a AD⁵. Los chavistas se precipitaron en la creación de estructuras paralelas, formando nuevos sindicatos (como en el caso de la federación de trabajadores petroleros), que en aquel momento tenían poca posibilidad de desplazar a los sindicatos de la CTV. Después de 2001, la necesidad de defender al gobierno frente a la creciente polari-

⁵ El control de la CTV por parte de los sindicalistas de AD databa de su fundación en 1947.

zación y a la crisis política también influyó para que los chavistas tomaran en cuenta criterios políticos más que estrictamente gremiales.

Estos acontecimientos explican por qué la autonomía sindical resultó un problema tan delicado y fue discutida con tanta vehemencia en el congreso que fundó la UNT en agosto de 2003, y por qué uno de los independientes más destacados, Ramón Machuca (presidente del sindicato de los trabajadores siderúrgicos), decidió mantenerse fuera de la nueva confederación por el momento. Para los sindicalistas chavistas, la UNT no podían darse el lujo de esperar soluciones sencillas a los problemas en debate. El riesgo de sabotaje en la industria petrolera (que según los chavistas fue empleado durante el paro de 1902-1903) y la posibilidad de un nuevo intento de la CTV de derrocar a Chávez, convencieron a muchos dirigentes de la UNT de que las luchas sindicales no podían disociarse de las luchas políticas. Por otra parte, los dirigentes de la UNT estaban decididos a no repetir los errores históricos de la CTV, que habían subordinado los intereses de los trabajadores a los compromisos políticos, al tiempo que promovieron al clientelismo.

El lema de la autonomía sindical recuerda las luchas obreras y los movimientos del pasado que no estaban controlados por los partidos políticos o por el Estado. Las posiciones asumidas por Ramón Machuca, por ejemplo, que querían asegurarle a la UNT una línea independiente, no aparecían en un vacío histórico. Machuca había pertenecido a la Causa R, un partido fraguado en la tradición de independencia obrera que se remontaba al comienzo del período democrático en la región industrial de Guayana (Buxton, 2001: 132-165). Durante decenios se habían producido expresiones de la independencia obrera en momentos críticos, aunque los enormes recursos derivados del petróleo, puestos a la disposición de los partidos políticos en el poder, se habían usado a menudo para atraer a los dirigentes rebeldes e integrarlos en el seno de AD y COPEI. Entre 1958 y 1960, por ejemplo, los dirigentes sindicales de todas las tendencias habían llamado al país a cerrar filas para enfrentar al posible resurgimiento militar, mientras que los políticos tradicionales promovían la polarización que condujo al aislamiento de la izquierda (Ellner, 1993: 5-16).

Conclusión: escenarios optimista y pesimista para la democracia venezolana

Los disturbios del Caracazo en febrero de 1989 comenzaron un período de confrontaciones políticas y una erosión de la fe en el sistema que abarcó los períodos de tres presidentes que tenían orientaciones políticas notablemente diferentes. Por lo tanto, la crisis política no se puede atribuir enteramente a sus estilos de liderazgo o incluso a sus políticas.

Han surgido dos tesis generales sobre las consecuencias de la crisis, que proponen distintos escenarios para el futuro de Venezuela.

Una tesis describe a Venezuela como históricamente condenada por unas instituciones políticas ineficientes que no han podido evitar conflictos agudos en el contexto de un estancamiento económico prolongado. Algunos analistas alineados a esta tesis atribuyen las instituciones débiles a la condición de Venezuela de país exportador de petróleo, lo cual ha generado ineficiencia y corrupción, ha institucionalizado las relaciones paternalistas, y ha creado expectativas materiales poco reales entre la gente común (Naím, 1993; Romero, 1997; Kart, 1997). Esta descripción pesimista, que a veces incluye a Venezuela en la misma categoría plagada de violencia de Colombia, predice un derrumbamiento de la autoridad y una exacerbación de la inestabilidad regional. Los analistas políticos que suscriben esta tesis ven el fenómeno venezolano bajo Chávez como relacionado con el síndrome del "Estado Fracasado" que ha hundido a varios países del mundo, incluyendo (según ciertos observadores) a la vecina Colombia (Adelman, 2002). Este término se refiere a los regímenes que no han logrado cumplir con ciertas funciones claves de Estado, incluyendo algunas de las que el gobierno venezolano ha sido acusado de abandonar: vigilancia de las fronteras nacionales, control de las actividades ilegales y terroristas, celeridad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la administración de la justicia y el uso efectivo de la fuerza no-represiva (Robinson, 2003). Aunque el gobierno de un hombre fuerte como Chávez es la antítesis del "Estado Fracasado", la violencia crónica e ingobernabilidad que según algunos observadores han caracterizado a Venezuela en los últimos años, dan los mismos resultados.

En contraste, la tesis optimista ve a Venezuela evolucionando en la dirección de una democracia más auténtica con una nueva estrategia económica que ha generado inevitables controversias y resistencias. En los años 90, los analistas Daniel Levine y Brian Crisp identificaron estos conflictos como los "dolores de crecimiento" de un proceso que prometía profundizar la democracia venezolana a través de la implementación de la descentralización y otras reformas del Estado (Crisp y Levine, 1998). La misma tesis se puede aplicar al gobierno de Chávez. Sin embargo, hay más en juego que durante los gobiernos anteriores, y los niveles de conflicto son más altos. La brecha entre la vieja democracia rechazada por los seguidores de Chávez y el modelo radical de democracia participativa y transformación económica que se esfuerzan por lograr, es mayor que los cambios contemplados por Levine y Crisp. Aunque la visión de una sociedad fundada en la participación popular directa es de cuestionable factibilidad, el desarrollo de una alternativa viable al neoliberalismo que tome en cuenta las exigencias de la globalización y acepte las inversiones extranjeras puede constituir un proceso realista aunque complejo.

El colocar a Venezuela en el contexto de las experiencias de las democracias recientes en América Latina, conocidas como de la "tercera ola" (Huntington, 1991) lleva a conclusiones que confirman la tesis optimista con respecto a la permanencia de la democracia. La experiencia política en América Latina desde el fin de los años 80 difiere de los años después de la Segunda Guerra Mundial y de los años 60 y 70, cuando intensas luchas sociales y políticas llevaron a rupturas democráticas y a golpes militares por todo el continente. Las democracias de la tercera ola han resultado más resistentes a los golpes militares. Las tensiones, sin embargo, siguen vigentes, particularmente las originadas por los profundos problemas sociales y económicos que aquejan a América Latina, como resultado de los defectos de las políticas neoliberales y de las dislocaciones generadas por la globalización. No obstante, estos problemas se han resuelto hasta ahora en el marco de las estructuras democráticas.

En el caso de Venezuela, las opciones militares de las que disponen tanto el campo de Chávez como el de sus adversarios, no se han concretado por varias razones. En primer lugar han sido vetadas por la presión de la comunidad internacional que se ha opuesto tajantemente a cualquier interrupción de la democracia de tercera ola en el continente. En segundo lugar, los sondeos de opinión en Venezuela han evidenciado un fuerte apoyo al sistema democrático a pesar del descrédito de los actores de la democracia (Canache, 2002: 67). Así, por ejemplo, a pesar de las acusaciones en contra de Chávez de apoyar a la guerrilla en Colombia, no hay ningún sentimiento público en Venezuela a favor de los insurgentes colombianos, ni siquiera entre los chavistas. El supuesto estilo mesiánico de Chávez hasta la fecha no se ha convertido en apoyo a los movimientos que amenazan con tumbar a los gobiernos democráticamente electos. Esta evidencia de la estabilidad y la sensatez es contraria a la aplicabilidad del concepto del "Estado Fracasado", que coloca a las democracias latinoamericanas a la par de las de otros países del mundo, las cuales enfrentan problemas agudos de terrorismo internacional, animosidades étnicas y religiosas, y la ausencia de un sentimiento general pro-democrático. En este sentido, como lo ha reconocido Samuel Huntington (1997), quien formuló el concepto de la "Democracia de Tercera Ola", las democracias latinoamericanas deben ser diferenciadas de las otras del Tercer Mundo, mucho menos prometedoras.

Después de cinco años en el poder, es evidente que la presidencia de Chávez tendrá un impacto político a largo plazo dentro y fuera de Venezuela. A pesar de su formulación de políticas alternas y de su discurso en contra del orden global, su gobierno se ha enfrentado con éxito a unos retos formidables como el golpe de abril de 2002 y la huelga general siguiente. Que su gobierno haya sobrevivido políticamente dice mucho para refutar las nociones de los defensores radicales de la "globalización" como Francis Fukuyama, quienes niegan la factibilidad de

cualquier vía alterna a las modalidades defendidas por los EE.UU. Otro legado seguro será el movimiento para incorporar a la política a los sectores marginales de la economía informal, largamente ignorados. Independientemente de quién suceda a Chávez, y cuándo, estos pasos, y también los planteamientos del Presidente con respecto a la necesidad de un Estado activista, tanto en la vida social y económica como en el escenario internacional, constituirán el punto focal de debates y acciones políticas futuras.

Referencias bibliográficas

- Adelman, Jeremy. 2002. "Andean Impasses" *New Left Review* 18.
- Blanco Muñoz, Agustín [entrevistador] 1998. *Habla el comandante* [interviews with Hugo Chávez]. UCV: Caracas.
- Buxton, Julia. 2001. *The Failure of Political Reform in Venezuela*. Aldershot, Inglaterra: Ashgate.
- Caballero, Manuel. 2002. *Revolución, reacción y falsificación*. Caracas: Alfadil.
- Canache, Damarys. 2002. *Venezuela: Public Opinion and Protest in a Fragile Democracy*. Coral Gables: North-South Center.
- Coppedge, Michael. 1994. *Strong Parties and Lame Ducks: Presidential Partyarchy and Factionalism in Venezuela*. Stanford: Stanford University Press.
- Crisp, Brian F., y Daniel H. Levine. 1998. "Democratizing the Democracy? Crisis and Reform in Venezuela". *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 40 (2): 27-61.
- Ellner, Steve. 1993. *Organized Labor in Venezuela, 1958-1991: Behavior and Concerns in a Democratic Setting*. Wilmington: Scholarly Resources.
- _____. 1999. "Obstacles to the Consolidation of the Venezuelan Neighbourhood Movement: National and Local Cleavages". *Journal of Latin American Studies* 31 (1): 75-97.
- _____. 2003. "Tendencias recientes en el movimiento laboral venezolano: autonomía vs. control político". *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*. 9 (3): 157-178.
- Francia, Néstor. 2003. *Qué piensa Chávez: aproximación a su discurso político*. Caracas: Instituto Municipal de Publicaciones.
- García Guadilla, María Pilar. 2002. "Democracy, Decentralization, and Clientelism: New Relationships and Old Practices". *Latin American Perspectives* 29 (5): 90-109.
- Gruber Odremán, Hernán. 1999. *Mi voz en la prensa*. Caracas: Fondo Editorial Nacional.
- Harnecker, Marta [entrevistador]. 2002. *Hugo Chávez: Un hombre, un pueblo*. N.p.
- Huntington, Samuel P. 1991. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- _____. 1997. "After Twenty Years: The Future of the Third Wave". *Journal of Democracy* 8 (4): 3-12.
- Karl, Terry Lynn. 1997. *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States*. Berkeley, California: University of California Press.

- Magdaleno, John. 2003. "Plan en marcha para quebrar a los grandes" [sección "Gobierno y Política"] *Veneconomía* 20 (6).
- Naím, Moisés. 1993. *Paper Tigers and Minotaurs: The Politics of Venezuela's Economic Reforms*. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.
- Robinson, Linda. 2003. "Terror Close to Home: In oil-rich Venezuela, a volatile leader befriends bad actors from the Mideast, Colombia, and Cuba. U.S. News and World Report (6 de octubre).
- Romero, Aníbal. 1997. "Rearranging the Deck Chairs on the Titanic: The Agony of Democracy in Venezuela". *Latin American Research Review* 32 (1): 7-36.
- Salamanca, Luis. 1998. *Obreros, movimiento social y democracia en Venezuela*. Caracas: UCV.
- Weyland, Kurt. 1999. "Populism in the Age of Neoliberalism". En *Populism in Latin America* editado por Conniff, Michael, Tuscaloosa, Alabama: University of Alabama.